

BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

I LEGISLATURA

Serie II.
PROYECTOS Y PROPOSICIONES
DE LEY REMITIDOS POR EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

22 de febrero de 1982

Núm. 203 (e)

(Cong. Diputados, Serie B, núm. 68)

PROPOSICION DE LEY

De integración Social de los Minusválidos.

DICTAMEN DE LA COMISION

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento provisional del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del Dictamen emitido por la Comisión de Sanidad y Seguridad Social en la Proposición de Ley de Integración Social de los Minusválidos.

Palacio del Senado, 17 de febrero de 1982.—El Presidente del Senado, **Cecilio Valverde Mazuelas**.—El Secretario primero del Senado, **Emilio Casals Parral**.

La Comisión de Sanidad y Seguridad Social, visto el Informe emitido por la Ponencia designada para el estudio de la Proposición de Ley de Integración Social de los Minusválidos, tiene el honor de elevar a V. E. el siguiente

DICTAMEN:

TITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.º

Los principios que inspiran la presente ley se fundamentan en los derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce, en razón a la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total integración social y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias.

Artículo 2.º

El Estado español inspirará la legislación para la integración social de los disminuidos en la declaración de derechos del

deficiente mental, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971, y en la declaración de derechos de los minusválidos, aprobada por la resolución 3.447 de dicha Organización, de 9 de diciembre de 1975, y amoldará a ellas su actuación.

Artículo 3.º

1. Los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1.º, constituyendo una obligación del Estado la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la integración laboral y la garantía de los derechos económicos, jurídicos y sociales que se prevén en la presente ley.

2. A estos efectos estarán obligados a participar, para su efectiva realización, en el ámbito de sus respectivas consecuencias, la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, los Sindicatos, las entidades y organismos públicos y las asociaciones, así como las personas privadas.

Artículo 4.º

1. La Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales ampararán y fomentarán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las instituciones, asociaciones y fundaciones sin fin de lucro, promovidas por los propios minusválidos, sus familiares o sus representantes legales.

2. Será requisito indispensable para percibir dicha colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que se establezca por parte de las Administraciones Públicas.

3. En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos,

existirán órganos de control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del personal al servicio de los centros, sin perjuicio de las facultades que correspondan a los poderes públicos.

Artículo 5.º

Los poderes públicos promoverán la información necesaria para la completa mentalización de la sociedad, especialmente en los ámbitos escolar y profesional, al objeto de que ésta, en su conjunto, colabore al reconocimiento y ejercicio de los derechos de los minusválidos, para su total integración.

Artículo 6.º

Las medidas tendentes a la promoción educativa, cultural, laboral y social de los minusválidos se llevarán a cabo mediante su integración en las instituciones de carácter general, excepto cuando por las características de sus minusvalías requieran una atención peculiar a través de servicios y centros especiales.

TITULO II

TITULARES DE LOS DERECHOS

Artículo 7.º

1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por minusválido toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

2. Las disposiciones para la aplicación y desarrollo de la presente ley podrán señalar las situaciones y grados que deben concurrir en el minusválido para acceder a los diferentes servicios y prestaciones.

3. El reconocimiento del derecho a la aplicación de los beneficios previstos en esta ley, deberá ser efectuado de manera personalizada por el órgano de la Administración que se determine reglamentariamente, previo informe de los correspondientes equipos multiprofesionales calificados.

4. A efectos del reconocimiento del derecho a los servicios que tiendan a prevenir la aparición de la minusvalía, se asimilan a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una minusvalía residual.

5. Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta ley se otorgarán a los extranjeros que tengan reconocida la situación de residentes en España, de conformidad con lo previsto en los acuerdos suscritos con sus respectivos Estados y en su defecto, en función del principio de reciprocidad.

6. El Gobierno extenderá la aplicación de las previsiones económicas previstas en esta ley a los españoles residentes en el extranjero, siempre que carezcan de protección equiparable en el país de residencia, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen.

TITULO III

PREVENCIÓN DE LAS MINUSVALÍAS

Artículo 8.º

La prevención de las minusvalías constituye un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de los servicios sociales.

Artículo 9.º

1. El Gobierno presentará a las Cortes Generales un Proyecto de ley en el que se fijarán los principios y normas básicas de ordenación y coordinación en materia de prevención de las minusvalías.

2. Sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder a las distintas Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, para formular sus propios planes de actuación en la materia, el Gobierno elaborará cuatrienalmente, en relación con tales planes, un Plan Nacional de Prevención de las Minusvalías que se presentará a las Cortes Generales para su conocimiento, y de cuyo desarrollo informará anualmente a las mismas.

3. En dichos planes se concederá especial importancia a los servicios de orientación y planificación familiar, consejo genético, atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz y asistencia pediátrica, así como a la higiene y seguridad en el trabajo, a la seguridad en el tráfico vial, al control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental. Se contemplarán de modo específico las acciones destinadas a las zonas rurales.

TITULO IV

DEL DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LAS MINUSVALÍAS

Artículo 10

1. Se crearán equipos multiprofesionales que, actuando en un ámbito sectorial, aseguren una atención interdisciplinaria a cada persona que lo precise, para garantizar su integración en su entorno socio-comunitario.

Su composición y funcionamiento se establecerán reglamentariamente, en el plazo máximo de dieciocho meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley.

2. Serán funciones de los equipos multiprofesionales de valoración:

a) Emitir un informe diagnóstico normalizado sobre los diversos aspectos de la personalidad y las disminuciones del presunto minusválido y de su entorno socio-familiar.

b) La orientación terapéutica, determinando las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación, así como el seguimiento y revisión.

c) La valoración y calificación de la presunta minusvalía, determinando el tipo y grado de disminución en relación con los beneficios, derechos económicos y servicios previstos en la legislación, sin perjuicio del reconocimiento del derecho que corresponda efectuar al órgano administrativo competente.

d) La valoración y calificación citadas anteriormente serán revisables en la forma que reglamentariamente se determine. La valoración y calificación definitivas sólo se realizarán cuando el presunto minusválido haya alcanzado su máxima rehabilitación o cuando su lesión sea presumiblemente definitiva, lo que no impedirá valoraciones previas para obtener determinados beneficios.

Artículo 11

Las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales responderán a criterios técnicos unificados y tendrán validez ante cualquier organismo público.

TITULO V

SISTEMA DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

Artículo 12

1. En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en el artículo 41 de la Constitución, el Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, establecerá y regulará por Decreto un sistema especial de prestaciones sociales y económicas para los minusválidos que, por no desarrollar una actividad laboral, no estén incluidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social. En dicho Decreto se especificarán las condiciones económicas que deberán reunir los beneficiarios de las distintas prestaciones.

2. La acción protectora de dicho sistema comprenderá al menos:

- a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
- b) Subsidio de garantía de ingresos mínimos.
- c) Subsidio por ayuda de tercera persona.
- d) Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.
- e) Recuperación profesional.
- f) Rehabilitación médico-funcional.

Artículo 13

1. La asistencia sanitaria y prestación farmacéutica previstas en el apartado 2, a), del artículo anterior será prestada por los Servicios Sanitarios del sistema de la Seguridad Social, con la extensión, duración y condiciones que reglamentariamente se determinen.

En todo caso, alcanzará a todos los comprendidos en el párrafo siguiente, con la máxima extensión.

2. Serán beneficiarios del subsidio a que se refiere el apartado c) del artículo 12, 2, los minusválidos mayores de edad, carentes de medios económicos cuyo grado de minusvalía exceda del que reglamentariamente se determine y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Las previsiones contenidas en el artículo 14, así como las relativas a la percepción de prestaciones pecuniarias por análogo motivo, son de aplicación al subsidio regulado en el presente artículo.

3. Los beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas descrito en el artículo anterior estarán exentos de abono de aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas.

Artículo 14

1. Todo minusválido mayor de edad cuyo grado de minusvalía exceda del que re-

glamentariamente se determine y que, por razón del mismo, se vea imposibilitado de obtener un empleo adecuado, tendrá derecho a percibir un subsidio de garantía de ingresos mínimos, cuya cuantía se fijará en las disposiciones de desarrollo de la presente ley, siempre que, careciendo de medios económicos, no perciba prestación pecuniaria del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o de la Seguridad Social. Cuando perciba una prestación económica, el subsidio se reducirá en cuantía igual al importe de aquélla.

2. Este subsidio será compatible con los recursos personales del beneficiario, si en cómputo mensual no exceden de una cuantía que se deducirá en el importe de las rentas producidas por dichos recursos personales, fijada anualmente por Decreto y que, en todo caso, tendrá en cuenta las personas que el minusválido tenga a su cargo.

3. La cuantía de este subsidio será determinada por Decreto, con carácter uniforme y no será inferior al 50 por ciento del salario mínimo interprofesional.

4. El derecho a la percepción del subsidio quedará subordinado, en su caso, al pleno cumplimiento, por parte del beneficiario, de aquellas medidas recuperadoras que se le hubieren prescrito.

Artículo 15

(Se convierte en el apartado 3 del artículo 14.)

Artículo 16 (nuevo artículo 15)

Los minusválidos acogidos en Centros públicos o privados financiados en todo o en parte con fondos públicos, y en tanto permanezcan en ellos, tendrán derecho a la parte del subsidio de garantía de ingresos mínimos que reglamentariamente se determine.

Artículo 17

(Se convierte en el apartado 2 del artículo 13.)

Artículo 18 (nuevo artículo 16)

Los minusválidos con problemas graves de movilidad que reúnan los requisitos que se establezcan reglamentariamente, tendrán asimismo derecho a la percepción del subsidio a que se refiere el apartado c) del artículo 14, 2, cuya cuantía será fijada por Decreto.

TITULO VI

DE LA REHABILITACION

Artículo 19 (nuevo artículo 17)

1. Se entiende por rehabilitación el proceso dirigido a que los minusválidos adquieran su máximo nivel de desarrollo personal y su integración en la vida social, fundamentalmente a través de la obtención de un empleo adecuado.

2. Los procesos de rehabilitación podrán comprender:

- a) Rehabilitación médico-funcional.
- b) Tratamiento y orientación psicológica.
- c) Educación general y especial.
- d) Recuperación profesional.

3. El Estado fomentará y establecerá el sistema de rehabilitación, que estará coordinado con los restantes servicios sociales, escolares y laborales en las menores unidades posibles, para acercar el servicio a los usuarios y administrado descentralizadamente.

SECCION PRIMERA

De la rehabilitación médico-funcional

Artículo 20 (nuevo artículo 18)

1. La rehabilitación médico-funcional dirigida a dotar de las condiciones precisas para su recuperación a aquellas personas que presenten una disminución de su capacidad física, sensorial o psíquica, deberá comenzar de forma inmediata a la detección y al diagnóstico de cualquier tipo de anomalía o deficiencia, debiendo continuarse hasta conseguir el máximo de

funcionalidad, así como el mantenimiento de ésta.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, toda persona que presente alguna disminución funcional, calificada según lo dispuesto en esta ley, tendrá derecho a beneficiarse de los procesos de rehabilitación médica necesarios para corregir o modificar su estado físico, psíquico o sensorial, cuando éste constituya un obstáculo para su integración educativa, laboral y social.

3. Los procesos de rehabilitación se complementarán con el suministro, la adaptación, conservación y renovación de aparatos de prótesis y órtesis, así como los vehículos y otros elementos auxiliares para los minusválidos cuya disminución lo aconseje.

Artículo 21 (nuevo artículo 19)

El proceso rehabilitador que se inicie en instituciones específicas se desarrollará en íntima conexión con los centros de recuperación en donde deba continuarse y proseguir, si fuera necesario, como tratamiento domiciliario, a través de equipos móviles multiprofesionales.

Artículo 22 (nuevo artículo 20)

El Estado intensificará la creación, dotación y puesta en funcionamiento de los servicios e instituciones de rehabilitación y recuperación necesarios y debidamente diversificados, para atender adecuadamente a los minusválidos, tanto en zonas rurales como urbanas, y conseguir su máxima integración social y fomentará la formación de profesionales, así como la investigación, producción y utilización de órtesis y prótesis.

SECCION SEGUNDA

Del tratamiento y orientación psicológica

Artículo 23 (nuevo artículo 21)

1. El tratamiento y la orientación psicológica estarán presentes durante las

distintas fases del proceso rehabilitador, e irán encaminadas a lograr del minusválido la superación de su situación y el más pleno desarrollo de su personalidad.

2. El tratamiento y orientación psicológicas tendrán en cuenta las características personales del minusválido, sus motivaciones e intereses, así como los factores familiares y sociales que puedan acondicionarle, y estarán dirigidos a potenciar al máximo el uso de sus capacidades residuales.

3. El tratamiento y apoyo psicológicos serán simultáneos a los tratamientos funcionales y, en todo caso, se facilitarán desde la comprobación de la minusvalía, o desde la fecha en que se inicie un proceso patológico que pueda desembocar en minusvalía.

SECCION TERCERA

De la educación

Artículo 24 (nuevo artículo 22)

1. El minusválido se integrará en el sistema ordinario de la educación general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y recursos que la presente ley reconoce.

2. La Educación Especial será impartida transitoria o definitivamente, a aquellos minusválidos a los que les resulte imposible la integración en el sistema educativo ordinario y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la presente ley.

Artículo 25 (nuevo artículo 23)

En todo caso, la necesidad de la educación especial vendrá determinada, para cada persona, por la valoración global de los resultados del estudio diagnóstico previo de contenido pluridimensional.

Artículo 26 (nuevo artículo 24)

La educación especial se impartirá en las instituciones ordinarias, públicas o privadas, del sistema educativo general, de

forma continuada, transitoria o mediante programas de apoyo, según las condiciones de las deficiencias que afecten a cada alumno y se iniciará tan precozmente como lo requiera cada caso, acomodando su ulterior proceso al desarrollo Psicobiológico de cada sujeto y no a criterios estrictamente cronológicos.

Artículo 27 (nuevo artículo 25)

1. La educación especial es un proceso integral, flexible y dinámico que se concibe para su aplicación personalizada y comprende los diferentes niveles y grados del sistema de enseñanza, particularmente los considerados obligatorios y gratuitos, encaminados a conseguir la total integración social del minusválido.

2. Concretamente, la educación especial tenderá a la consecución de los siguientes objetivos:

a) La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas derivadas de aquéllas.

b) La adquisición de conocimientos y hábitos que le doten de la mayor autonomía posible.

c) La promoción de todas las capacidades del minusválido para el desarrollo armónico de su personalidad.

d) La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita a los minusválidos ser útiles a la sociedad y realizarse a sí mismos.

Artículo 28 (nuevo artículo 26)

Solamente cuando la profundidad de la minusvalía lo haga imprescindible, la educación para minusválidos se llevará a cabo en Centros específicos. A estos efectos funcionarán en conexión con los Centros ordinarios, dotados de unidades de transición para facilitar la integración de sus alumnos en Centros ordinarios.

Artículo 29 (nuevo artículo 27)

1. La educación especial, en cuanto proceso integrador de diferentes activida-

des, deberá contar con el personal interdisciplinario técnicamente adecuado que, actuando como equipo multiprofesional, garantice las diversas atenciones que cada deficiente requiera.

2. Todo el personal que, a través de las diferentes profesiones y en los distintos niveles, intervenga en la educación especial deberá poseer, además del título profesional adecuado a su respectiva función, la especialización, experiencia y aptitud necesarias.

3. Los equipos multiprofesionales previstos en el artículo 10 elaborarán las orientaciones pedagógicas individualizadas, cuya aplicación corresponderá al profesorado del Centro. Estos mismos equipos efectuarán periódicamente el seguimiento y evaluación del proceso integrador del minusválido en las diferentes actividades, en colaboración con dicho Centro.

Artículo 30 (nuevo artículo 28)

Los poderes públicos garantizarán la continuidad del proceso educativo de los minusválidos en edad escolar que se hallen internados en establecimientos sanitarios privados o públicos. Para ello deberán arbitrar los procedimientos más apropiados, habida cuenta de las circunstancias de los establecimientos y de los escolares, impidiendo en todo caso cualquier marginación o retraso.

Artículo 31 (nuevo artículo 29)

Los minusválidos, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad de la enseñanza, en las instituciones de carácter general, en las de atención particular y en los centros especiales, de acuerdo con lo que dispone la Constitución y las leyes que la desarrollan.

Artículo 32 (nuevo artículo 30)

1. Dentro de la educación especial se considerará la formación profesional del minusválido de acuerdo con lo establecido

en los diferentes niveles del sistema de enseñanza general y con el contenido de los artículos anteriores.

2. Los minusválidos que cursen estudios universitarios, cuya minusvalía les dificulte gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter general, podrán solicitar y los centros habrán de conceder la ampliación del número de las mismas en la medida que compense su dificultad. Sin mengua del nivel exigido, las pruebas se adaptarán, en su caso, a las características de la minusvalía que presente el interesado.

3. A efectos de la participación en el control y gestión previstos en el Estatuto de Centros Escolares, se tendrá en cuenta la especialidad de esta ley en lo que se refiere a los equipos especializados.

SECCION CUARTA

De la recuperación profesional

Artículo 33 (nuevo artículo 31)

1. Los minusválidos en edad laboral tendrán derecho a beneficiarse de las prestaciones de recuperación profesional de la Seguridad Social, en las condiciones que establezcan en las disposiciones de desarrollo de la presente ley.

2. Los procesos de recuperación profesional comprenderán, entre otras, las siguientes prestaciones:

a) Los tratamientos de rehabilitación médico-funcional, regulados en la Sección primera de este Título.

b) La orientación profesional.

c) La formación, readaptación o reeducación profesional.

Artículo 34 (nuevo artículo 32)

La orientación profesional será prestada por los servicios correspondientes, previo estudio del informe de los equipos multiprofesionales, y atendiendo a la capacidad física e intelectual del minusválido, a sus preferencias profesionales y a las posibilidades de empleo existentes en cada caso.

Artículo 35 (nuevo artículo 33)

1. La formación, readaptación o reeducación profesional, que podrá comprender, en su caso, una preformación general básica, se impartirá de acuerdo con la orientación profesional prestada con anterioridad, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 3.º de esta ley, y en la Sección segunda del presente Título.

2. Las actividades formativas podrán impartirse en los centros de carácter general o especial dedicados a ello y en las empresas, siendo necesario en este último supuesto, la formalización de un contrato especial de formación profesional entre el minusválido o, en su caso, el representante legal, y el empresario, cuyo contenido básico deberá ser fijado por las normas de desarrollo de la presente ley, en relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 36 (nuevo artículo 34)

1. Las prestaciones a que se refiere la presente Sección podrán ser complementadas, en su caso, con otras medidas adicionales que faciliten al beneficiario el logro del máximo nivel de desarrollo personal y favorezcan su plena integración en la vida social.

2. Los beneficiarios de la prestación de recuperación del sistema de Seguridad Social podrán beneficiarse, asimismo, de las medidas complementarias a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 37 (nuevo artículo 35)

1. Los procesos de recuperación profesional serán prestados por los servicios de recuperación y rehabilitación de la Seguridad Social, previa la fijación para cada beneficiario del programa individual que se estime procedente.

2. A tales efectos, por los Ministerios competentes, en el plazo de un año, se elaborará un plan de actuación en la materia, en el que, en base al principio de sectorización, se prevean los centros y servicios necesarios, teniendo presente la coordina-

ción entre las fases médica, escolar y laboral del proceso de rehabilitación y la necesidad de garantizar a los minusválidos residentes en zonas rurales el acceso a los procesos de recuperación profesional.

3. La dispensación de los tratamientos recuperadores será gratuita.

4. Quienes reciban las prestaciones de recuperación profesional percibirán un subsidio en las condiciones que determinen las disposiciones de desarrollo de la presente ley.

TITULO VII

DE LA INTEGRACION LABORAL

Artículo 38 (nuevo artículo 36)

Será finalidad primordial de la política de empleo de trabajadores minusválidos su integración en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido que se menciona en el artículo 42 (nuevo artículo 40).

Artículo 39 (nuevo artículo 37)

1. Las empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de cincuenta, vendrán obligadas a emplear un número de trabajadores minusválidos no inferior al dos por ciento de la plantilla.

2. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales, de las empresas que supongan en contra de los minusválidos discriminaciones en el empleo, en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo.

3. En las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local, Institucional y de la Seguridad Social serán admitidos los mi-

nusválidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.

Las condiciones personales de aptitud, para el ejercicio de las funciones correspondientes se acreditarán en su caso mediante dictamen vinculante expedido por el equipo multiprofesional, competente, que deberá ser emitido con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.

4. Se fomentará el empleo de los trabajadores minusválidos mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su integración laboral. Estas ayudas podrán consistir en subvenciones o préstamos para la adaptación de los puestos de trabajo, la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su acceso y movilidad en los centros de producción, la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos, el pago de las cuotas de la Seguridad Social y cuantas otras se consideran adecuadas para promover la colocación de los minusválidos, especialmente la promoción de cooperativas.

Artículo 40 (nuevo artículo 38)

1. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de las oficinas de empleo del Instituto Nacional de Empleo, la colocación de los minusválidos que finalicen su recuperación profesional, cuando ésta sea precisa.

2. A los efectos de aplicación de beneficios que la presente ley y sus normas de desarrollo reconozcan, tanto a los trabajadores minusválidos como a las empresas que los empleen, se confeccionará, por parte de las oficinas de empleo, un registro de trabajadores minusválidos demandantes de empleo, incluidos en el censo general de parados.

3. Para garantizar la eficaz aplicación de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, y lograr la adecuación entre las condiciones personales del minusválido y las características del puesto de trabajo, se establecerá, reglamentariamente, la coordinación entre las Oficinas de Empleo y los equipos multiprofesionales previstos en la presente ley.

Artículo 41 (nuevo artículo 39)

1. En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se dictarán las normas de desarrollo sobre el empleo selectivo regulado en la Sección tercera del capítulo VII del Título II de la Ley General de la Seguridad Social, coordinando las mismas con lo dispuesto en la presente ley.

2. En las citadas normas se regularán específicamente las condiciones de readmisión, por las empresas, de sus propios trabajadores, una vez terminados los correspondientes procesos de recuperación.

Artículo 42 (nuevo artículo 40)

1. Los minusválidos que por razón de la naturaleza o de las consecuencias de sus minusvalías, no puedan, provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales, deberán ser empleados en Centros de Empleo Especial, cuando su capacidad de trabajo sea igual o superior a un porcentaje de la capacidad habitual que se fijará por la correspondiente norma reguladora de la relación laboral de carácter especial de los trabajadores minusválidos que presten sus servicios en Centros de Empleo Especial.

2. Cuando la capacidad residual de los minusválidos no alcanzara el porcentaje establecido en el apartado anterior, accederán en su caso a los Centros Ocupacionales previstos en el Título VIII de esta ley.

3. Los equipos multiprofesionales de valoración previstos en el artículo 10 determinarán, en cada caso, mediante resolución motivada, las posibilidades de integración real y la capacidad de trabajo de los minusválidos a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 43 (nuevo artículo 41)

1. Son Centros de Empleo Especial aquellos cuyo objetivo principal sea el asegurar un empleo remunerado y la presta-

ción de los servicios que requiera la condición de trabajador minusválido, realizando un trabajo productivo y participando regularmente en las operaciones del mercado.

2. La totalidad de la plantilla de los Centros de Empleo Especial estará constituida por trabajadores minusválidos, sin perjuicio de las plazas en plantilla del personal no minusválido imprescindible para el desarrollo de la actividad.

Artículo 44 (nuevo artículo 42)

1. En atención a las especiales características que concurren en los Centros de Empleo Especial y para que éstos puedan cumplir la función social requerida, las Administraciones Públicas podrán, de la forma en que reglamentariamente se determine, establecer compensaciones económicas, destinadas a los Centros, para ayudar a la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello, además, los mecanismos de control que se estimen pertinentes.

2. Los criterios para establecer dichas compensaciones económicas serán que estos Centros de Empleo Especial reúnan las condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro.

Artículo 45 (nuevo artículo 43)

Los trabajadores minusválidos empleados en los Centros de Empleo Especial, quedarán incluidos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, dictándose por el Gobierno las normas específicas de sus condiciones de trabajo y de Seguridad Social, en atención a las peculiares características de su actividad laboral.

Artículo 46 (nuevo artículo 44)

1. Los Centros de Empleo Especial podrán ser creados tanto por Organismos públicos y privados como por las empresas, siempre con sujeción a las normas legales, reglamentarias y convencionales, que regulen las condiciones de trabajo.

2. Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus competencias y a través del estudio de necesidades sectoriales, promoverán la creación y puesta en marcha de Centros de Empleo Especial sea directamente o en colaboración con otros Organismos o Entidades; a la vez que fomentarán la creación de puestos de trabajo especiales para minusválidos mediante la adopción de las medidas necesarias para la consecución de tales finalidades. Asimismo, vigilarán, de forma periódica y rigurosa, que los minusválidos sean empleados en condiciones de trabajo adecuadas.

Artículo 47 (nuevo artículo 45)

Los equipos multiprofesionales de valoración deberán someter a revisiones periódicas a los minusválidos empleados en los Centros de Empleo Especial a fin de impulsar su promoción teniendo en cuenta el nivel de recuperación y adaptación laboral alcanzado.

Artículo 48 (nuevo artículo 46)

1. Aquellos minusválidos en edad laboral, cuya capacidad esté comprendida entre los grados mínimo y máximo que se fijan de conformidad con lo previsto en el artículo 7.º, que no cuenten con un puesto laboral retribuido por causas a ellos no imputables, tendrán derecho a percibir el subsidio de garantía de ingresos mínimos establecido en el artículo 14, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro previsto en el artículo 40, 2 (nuevo 38, 2), siempre que reúnan los mismos requisitos de orden económico establecidos en el artículo 14 y por el período máximo establecido para las prestaciones por desempleo en la Ley Básica de Empleo.

2. El derecho a la percepción del subsidio quedará subordinado al previo cumplimiento, por parte del beneficiario, de aquellas medidas de recuperación profesional que, en su caso, se le hubiesen prescrito.

Artículo 49 (nuevo artículo 47)

El pago del subsidio de garantía de ingresos mínimos se hará efectivo mientras subsista la situación de paro, dentro del período máximo a que se refiere el artículo anterior, y supuesto que el minusválido parado no haya rechazado una oferta de empleo adecuada a sus aptitudes físicas y profesionales.

TITULO VIII

DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Artículo 50 (nuevo artículo 48)

Los Servicios Sociales para los minusválidos tienen como objetivo garantizar a éstos el logro de adecuados niveles de desarrollo personal y de integración en la comunidad, así como la superación de las discriminaciones adicionales padecidas por los minusválidos que residan en las zonas rurales.

Artículo 51 (nuevo artículo 49)

La actuación en materia de Servicios Sociales para minusválidos se acomodará a los siguientes criterios:

a) Todos los minusválidos, sin discriminación alguna, tienen derecho a las prestaciones de los Servicios Sociales.

b) Los Servicios Sociales podrán ser prestados tanto por las Administraciones Públicas como por instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro.

c) Los Servicios Sociales para minusválidos, responsabilidad de las Administraciones Públicas, se prestarán por las instituciones y centros de carácter general a través de los cauces y mediante los recursos humanos, financieros y técnicos de carácter ordinario, salvedad hecha de cuando, excepcionalmente, las características de las minusvalías exijan una atención singularizada.

d) La prestación de los Servicios Sociales respetará al máximo la permanen-

cia de los minusválidos en su medio familiar y en su entorno geográfico, mediante la adecuada localización de los mismos, a la vez que deberá contemplar, especialmente, la problemática peculiar de los disminuidos que habitan en zonas rurales.

e) El control y gestión de los servicios sociales se realizará con la participación de los minusválidos o subsidiariamente de sus representantes legales, del personal que trabaje en los mismos y de las Corporaciones Locales, en su caso.

Artículo 52 (nuevo artículo 50)

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta ley, los minusválidos tendrán derecho a los servicios sociales de orientación familiar, de información y orientación, de atención domiciliaria, de residencias y hogares comunitarios, de actividades culturales, deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre.

2. Además, y como complemento de las medidas específicamente previstas en esta ley, podrán dispensarse con cargo a las consignaciones que figuren al efecto en el capítulo correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado, Servicios y prestaciones económicas a los minusválidos que se encuentren en situación de necesidad y que carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a la misma.

Artículo 53 (nuevo artículo 51)

1. La orientación familiar tendrá como objetivo la información a las familias, su capacitación y entrenamiento para atender a la estimulación y maduración de los hijos minusválidos y a la adecuación del entorno familiar a las necesidades rehabilitadoras de aquéllos.

2. Los servicios de orientación e información deben facilitar al minusválido el conocimiento de las prestaciones y servicios a su alcance, así como las condiciones de acceso a los mismos.

3. Los servicios de atención domiciliaria tendrán como cometido la prestación de atenciones de carácter personal y do-

méstico, así como la prestación rehabilitadora tal y como ya dispone el artículo 23 de la presente ley, todo ello sólo para aquellos minusválidos cuyas situaciones lo requieran.

4. Los servicios de Residencias y Hogares comunitarios tienen como objetivo atender a las necesidades básicas de aquellos minusválidos carentes de hogar y familia o con graves problemas de integración familiar.

Estas Residencias y Hogares comunitarios podrán ser promovidos por las Administraciones Públicas, por los propios minusválidos y por sus familias. En la promoción de Residencia y Hogares comunitarios, realizados por los propios minusválidos y por sus familias, éstos gozarán de la protección prioritaria por parte de las Administraciones Públicas.

5. Las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre se desarrollarán, siempre que sea posible, en las instalaciones y con los medios ordinarios de la comunidad. Sólo de forma subsidiaria o complementaria podrán establecerse servicios y actividades específicas para aquellos casos en que, por la gravedad de la minusvalía, resultara imposible la integración.

A tales efectos, en las normas previstas en el artículo 55 (ahora 53) de esta ley, se adoptarán las previsiones necesarias para facilitar el acceso de los minusválidos a las instalaciones deportivas, recreativas y culturales.

6. Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas con carácter general en la presente ley, y cuando la profundidad de la minusvalía lo hiciera necesario, la persona minusválida tendrá derecho a residir y ser asistida en un establecimiento especializado.

Artículo 54 (nuevo artículo 52)

1. Los Centros Ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a los minusválidos cuya acusada minusvalía temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un Centro de Empleo Especial.

2. Las Administraciones Públicas, de acuerdo a sus competencias, dictarán las normas específicas correspondientes, estableciendo las condiciones de todo tipo que deberán reunir los Centros Ocupacionales para que sea autorizada su creación y funcionamiento.

Su creación y sostenimiento serán competencia tanto de dichas Administraciones Públicas como de las instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, atendiendo estas últimas, en todo caso, a las normas que para su creación y funcionamiento se dicten de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior.

TITULO IX

OTROS ASPECTOS DE LA ATENCION A LOS MINUSVALIDOS

SECCION PRIMERA

Movilidad y barreras arquitectónicas

Artículo 55 (nuevo artículo 53)

1. La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos.

2. Quedan únicamente excluidas de la obligación anterior las reparaciones que exigieran la higiene, el ornato y la normal conservación de los inmuebles existentes, así como las obras de reconstrucción o conservación de los monumentos de interés histórico o artístico.

3. A tal fin, las Administraciones Públicas competentes aprobarán las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas conteniendo las condiciones a que deberán ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios a los que serán de aplicación las mismas y el procedimiento de autorización fiscalización y, en su caso, sanción.

Artículo 56 (nuevo artículo 54)

1. Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes y cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine, a las reglas y condiciones previstas en las Normas Urbanísticas y Arquitectónicas básicas a que se refiere el artículo anterior.

2. A tal fin los Entes públicos habilitarán en sus presupuestos las consignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependan.

3. Al mismo tiempo, fomentarán la adaptación de los inmuebles de titularidad privada, mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones.

4. Además, las Administraciones urbanísticas deberán considerar, y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben.

Artículo 57 (nuevo artículo 55)

Los Ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines a las normas aprobadas con carácter general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a los fines previstos en este artículo.

Artículo 58 (nuevo artículo 56)

1. En los proyectos de viviendas de protección oficial y viviendas sociales, se programará un mínimo del 3 por ciento con las características constructivas suficientes para facilitar el acceso de los minusválidos, así como el desenvolvimiento normal de sus actividades motrices y su integración en el núcleo en que habiten.

2. La obligación establecida en el párrafo anterior, alcanzará, igualmente, a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o

subvencionen por las Administraciones Públicas y demás entidades dependientes o vinculadas al Sector Público. Por las Administraciones Públicas competentes se dictarán las disposiciones reglamentarias para garantizar la instalación de ascensores con capacidad para transportar simultáneamente una silla de ruedas de tipo normalizado y una persona no minusválida.

3. Por las Administraciones Públicas se dictarán las normas técnicas básicas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los dos apartados anteriores.

4. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e instalaciones que constituyan un complejo arquitectónico, éste se proyectará y construirá en condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad de los disminuidos a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias.

Artículo 59 (nuevo artículo 57)

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las normas técnicas básicas sobre edificación incluirán previsiones relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de los minusválidos.

2. Todas estas normas deberán ser recogidas en la fase de redacción de los proyectos básicos y de ejecución, denegándose los visados oficiales correspondientes, bien de Colegios Profesionales o de oficinas de supervisión de los distintos Departamentos Ministeriales, a aquéllos que no las cumplan.

Artículo 60 (nuevo artículo 58)

Al objeto de facilitar la movilidad de los minusválidos, en el plazo de un año se adoptarán medidas técnicas en orden a la adaptación progresiva de los transportes públicos colectivos.

Artículo 61 (nuevo artículo 59)

Por los Ayuntamientos se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el esta-

cionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a los minusválidos con problemas graves de movilidad.

Artículo 62 (nuevo artículo 60)

Se considerará rehabilitación de la vivienda, a efectos de la obtención de subvenciones y préstamos con subvención de intereses, las reformas que los minusválidos, por causa de su minusvalía, tengan que realizar en su vivienda habitual y permanente.

SECCION SEGUNDA

Medidas Complementarias

Artículo 63

(Se convierte en el apartado 5 del artículo 53.)

SECCION TERCERA

(Nueva Sección Segunda)

Del personal de los distintos servicios

Artículo 64 (nuevo artículo 61)

1. La atención y prestación de los servicios que requieran los minusválidos en su proceso de recuperación e integración, deberán estar orientadas, dirigidas y realizadas por personal especializado.

2. Este proceso, por la variedad, amplitud y complejidad de las funciones que abarca, exige el concurso de diversos especialistas que deberán actuar conjuntamente como equipo multiprofesional.

Artículo 65 (nuevo artículo 62)

1. El Estado adoptará las medidas pertinentes para la formación de los diversos especialistas, en número y con las cualificaciones necesarias para atender adecuadamente los diversos servicios que los minusválidos requieren, tanto a nivel de detección y valoración como educativo y de servicios sociales.

2. El Estado establecerá programas permanentes de especialización y actualiza-

ción, de carácter general y de aplicación especial para las diferentes deficiencias, así como sobre modos específicos de recuperación, según la distinta problemática de las diversas profesiones.

Artículo 66 (nuevo artículo 63)

1. El Estado fomentará la colaboración del voluntariado en la atención de los disminuidos promoviendo la constitución y funcionamiento de instituciones sin fin de lucro que agrupen a personas interesadas en esta actividad, a fin de que puedan colaborar con los profesionales en la realización de actuaciones de carácter vocacional en favor de aquéllos.

2. Las funciones que desempeñe dicho personal vendrán determinadas, en forma permanente, por la prestación de atenciones domiciliarias y aquellas otras que no impliquen una permanencia en el servicio ni requieran especial cualificación.

3. Por los poderes públicos se procurará orientar hacia la atención de los disminuidos, a quienes resulten obligados a la realización de una prestación civil sustitutoria respecto del cumplimiento del servicio militar, y a quienes se incorporen al servicio civil para la atención de fines de interés general de conformidad con lo previsto en los artículos 30, 2 y 3, de la Constitución y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo.

TITULO X

GESTION Y FINANCIACION

Artículo 67 (nuevo artículo 64)

1. En el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno efectuará la reorganización administrativa en orden a la atención integral a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, que racionalice, simplifique y unifique los órganos de la Administración actualmente existentes y coordine racionalmente sus competencias.

2. La organización administrativa expresada en el apartado anterior, deberá contemplar, especialmente, la planificación de la política general de atención a minusválidos; la descentralización de los servicios mediante la sectorización de los mismos; la participación democrática de los beneficiarios, por sí mismos o a través de sus legales representantes y de los profesionales del campo de la deficiencia directamente o a través de Asociaciones específicas; la financiación pública de las actuaciones encaminadas a la atención integral de los disminuidos; la elaboración, programación, ejecución, control y evaluación de los resultados de una planificación regional y la integración de dicha planificación en el contexto de los servicios generales sanitarios, educativos, laborales y sociales, y en el programa nacional de desarrollo socio-económico.

Artículo 68 (nuevo artículo 65)

La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y servicios contenidos en la presente ley, se efectuará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y a los de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, de acuerdo con las competencias que les correspondan respectivamente. En dichos presupuestos deberán consignarse de manera específica las dotaciones correspondientes.

Disposición transitoria

Las actuales Unidades de Valoración quedan integradas, con sus correspondientes dotaciones presupuestarias actuales, en los equipos multiprofesionales que contempla la presente ley.

Disposición adicional primera

En las leyes y en las disposiciones de carácter reglamentario que, promulgadas a partir de la entrada en vigor de esta ley, regulen con carácter general los distintos

aspectos de la atención a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales contemplados en esta ley, se incluirán preceptos que reconozcan el derecho de los disminuidos a las prestaciones generales y, en su caso, la adecuación de los principios generales a las peculiaridades de los minusválidos.

Disposición adicional segunda (nueva)

Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.

Disposición final primera

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno someterá a las Cortes un Proyecto de ley que modifique los Títulos IX y X del Libro I del vigente Código Civil, en relación con la incapacidad y sistema tutelar de las personas deficientes.

Disposición final segunda

En el plazo de un año someterá el Gobierno a las Cortes un Proyecto que modifique el artículo 380, siguientes y concordantes, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Disposición final tercera

Se autoriza al Gobierno para modificar por Decreto, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las Disposiciones reguladoras de la invalidez contenidas en la Ley General de la Seguridad Social, adaptándolas a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final cuarta

Se modifica el artículo 132 de la Ley de la Seguridad Social, texto refundido, para que no sea necesaria el alta médica para la valoración de la invalidez permanente, cuyas secuelas son definitivas.

Disposición final quinta

Se modifica el artículo 135 de la Ley de Seguridad Social, texto refundido, por el que se exige para la declaración de gran invalidez estar afecto de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. La gran invalidez no implica necesariamente la incapacidad permanente absoluta para toda clase de trabajo.

Disposición final sexta

De conformidad con lo previsto en el artículo dos del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno, en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta ley, aprobará las disposiciones reguladoras de trabajo de las personas con capacidad física, psíquica o sensorial disminuida que presen servicios laborales en los Centros de Empleo Especial a que se refiere la presente ley.

Disposición final séptima

Para adecuar el coste de los derechos contenidos en esta Ley de Integración Social de los Minusválidos a las disponibilidades presupuestarias que permita la situación económica del país, se establece la siguiente lista de prioridades, que las Administraciones Públicas deberán atender inexcusablemente, en la forma indicada abajo. De todos modos, el coste total de la presente ley debe estar plenamente asumido en el plazo máximo de diez años a partir de su entrada en vigor.

Dichas prioridades serán las siguientes para los dos primeros años de aplicación de la ley:

1. Normativa sobre los equipos multi-profesionales.
2. Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
3. Servicios sociales, en especial los centros ocupacionales para minusválidos profundos y grandes inválidos.
4. Subsidio de ingresos mínimos, mediante aumentos porcentuales que se realizarán de forma progresiva y continuada,

y que se determinarán reglamentariamente, empezando con un mínimo que sea superior a las actuales percepciones por este concepto.

5. Subsidio de ayuda a terceras personas.

6. Subsidio de movilidad y compensación de transporte.

7. Normativa sobre Educación Especial.

8. Normativa sobre movilidad y barreras arquitectónicas.

9. Normativa sobre Centros de Empleo Especial.

10. Normativa sobre los programas permanentes de especialización y actualización previstos en el artículo 65, 2 (nuevo artículo 62, 2).

El resto de las prestaciones, subsidios, atenciones y servicios podrán ser desarrolladas con posterioridad al plazo antes in-

dicado, de función de las necesidades generadas por la aplicación de la presente ley.

Este desarrollo deberá hacerse de manera progresiva y continuada, para que en cada bienio, hasta llegar al plazo máximo de diez años fijados anteriormente, se pongan en marcha las prestaciones, subsidios, atenciones y servicios previstos en esta ley o se completen los ya iniciados.

Disposición final octava

Quedan derogadas cuantas normas sean contrarias a la presente ley.

Palacio del Senado, 16 de febrero de 1982.—El Presidente de la Comisión, **Gregorio Toledo Rodríguez**.—El Secretario de la Comisión, **Manuel Fombuena Escudero**.

VOTOS PARTICULARES

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento provisional del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de los **votos particulares** presentados al Dictamen emitido por la Comisión de Sanidad y Seguridad Social en la Proposición de Ley de Integración Social de los Minusválidos.

Palacio del Senado, 18 de febrero de 1982.—El Presidente del Senado, **Cecilio Valverde Mazuelas**.—El Secretario primero del Senado, **Emilio Casals Parral**.

NUM. 1

De D. Pedro Cañada Castillo (Mx).

Excmo. Sr.: Pedro Cañada Castillo, Senador del Grupo Parlamentario Mixto, en

virtud de lo contenido en el artículo 114 del Reglamento provisional del Senado, solicita de V. E. tenga a bien aceptar la inclusión en el Orden del Día del Pleno correspondiente, la defensa de sus votos particulares a la Proposición de Ley de Integración Social de los Minusválidos, enmiendas números 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72.

Dios guarde a V. E.

Palacio del Senado, 16 de febrero de 1982.—**Pedro Cañada Castillo**.

NUM. 2

Del Grupo Parlamentario de Senadores Vascos (SV).

Excmo. Sr.: El Grupo Parlamentario de Senadores Vascos, y en su nombre el Portavoz que suscribe, al amparo de lo dis-

puesto en los artículos 93, 2, y 114 del vigente Reglamento provisional del Senado, comunica a V. E. el mantenimiento como VOTOS PARTICULARES a la Proposición de Ley de Integración Social de los Minusválidos ("BOCG", Senado, Serie II, número 203), de las enmiendas que a continuación se indican, defendidas por este Grupo en la Comisión de Sanidad y Seguridad Social, para que las mismas sean defendidas ante el próximo Pleno de esta Cámara.

Enmienda número 17 (sólo la parte final de dicha enmienda).

Enmienda número 21.

Enmienda número 22.

Palacio del Senado, 16 de febrero de 1982.—El Portavoz, José Luis Iriarte Errazti.

NUM. 3

Del Grupo Parlamentario Socialista (S).

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Seguridad Social

El Grupo Parlamentario Socialista reserva las siguientes enmiendas, para que sean defendidas como votos particulares ante el Pleno de la Cámara, de la Proposición de Ley de Integración Social de los Minusválidos:

Enmienda número 41, al preámbulo.

Enmienda número 43, al artículo 3.º

Enmienda número 49, al artículo 12.

Enmienda número 50, al artículo 31.

Enmienda número 52, al artículo 48.

Enmienda número 53, al artículo 48.

Enmienda número 54, al artículo 49.

Enmienda número 58, al artículo 66.

Enmienda número 59, al artículo 67.

Enmienda número 60, a la Disposición final séptima.

Palacio del Senado, 16 de febrero de 1982.—El Portavoz, Juan José Laborda Martín.

NUM. 4

De D. Manuel Sevilla Corella (UCD).

Excmo. Sr.: El que suscribe, Manuel Sevilla Corella, Senador perteneciente al Grupo Parlamentario de UCD, a V. E. tiene el honor de exponer:

Que en la sesión celebrada en el día de hoy por la Comisión de Sanidad, formulo como voto particular la enmienda número 94 al artículo 15, que presenté al texto relativo a la Proposición de Ley sobre la Integración Social de los Minusválidos y deseando defender tal voto particular ante el Pleno, de conformidad con el artículo 114 del Reglamento provisional del Senado, así lo comunico a V. E. por medio del presente escrito, a los oportunos efectos de su inclusión en el Orden del Día.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Palacio del Senado, 16 de febrero de 1982.—Manuel Sevilla Corella.

NUM. 5

De D. Vicente Bosque Hita (Mx).

Excmo. Sr.: Según lo establecido en el artículo 114 del Reglamento provisional de esta Cámara, tengo el honor de manifestar a V. E. que en relación con la Proposición de Ley de Integración Social de los Minusválidos, me sean admitidas como votos particulares para ser defendido en el Pleno de la Cámara, mis enmiendas a dicha Proposición, números 31, 33, 34, 36, 40 y la enmienda "in voce", presentada ante la Comisión para la inclusión de un nuevo artículo 32 bis.

Dios guarde a V. E.

Palacio del Senado, 17 de febrero de 1982.—Vicente Bosque Hita.

ANEXO: Artículo 32 bis:

"La Educación Especial estará integrada dentro del sistema de enseñanza gratuita y obligatoria."

NUM. 6

Del Grupo Parlamentario Socialista (S).

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Seguridad Social

El Grupo Parlamentario Socialista mantiene como votos particulares para su defensa en el Pleno del Senado, a la Proposición de Ley de Integración Social de los Minusválidos, la enmienda número 48, referida al Título V; y el voto particular en contra de la inclusión, por la Comisión, de un nuevo párrafo 1.º bis, del artículo 7.º

Palacio del Senado, 17 de febrero de 1982.—El Portavoz, **Juan José Laborda Martín**.

NUM. 7

De D. Ramiro Cercós Pérez (Mx).

Excmo. Sr.: Según lo establecido en el artículo 114 del Reglamento provisional de

esta Cámara, tengo el honor de manifestar a V. E. que, en relación con la Proposición de Ley de Integración Social de los Minusválidos, me sean admitidas como votos particulares para ser defendido en el Pleno de la Cámara, mis enmiendas a dicha Proposición, números 75, 76, 78, 80 y 86.

Dios guarde a V. E.

Palacio del Senado, 17 de febrero de 1982.—**Ramiro Cercós Pérez**.

NUM. 8

De D. Manuel Fombuena Escudero (UCD).

Excmo. Sr.: El que suscribe, Manuel Fombuena Escudero, del Grupo Parlamentario de UCD, tiene el honor de comunicar a V. E. que mantiene como votos particulares a la Proposición de Ley sobre la Integración Social de los Minusválidos:

1. Al apartado e) del artículo 51, proponiendo mantener el texto del Congreso.
2. La supresión de la Disposición adicional nueva.

Rogándole que de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Reglamento provisional del Senado, lo considere a los efectos oportunos.

Palacio del Senado, 17 de febrero de 1982.—**Manuel Fombuena Escudero**.

Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 247-23-00, Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.580 - 1961